

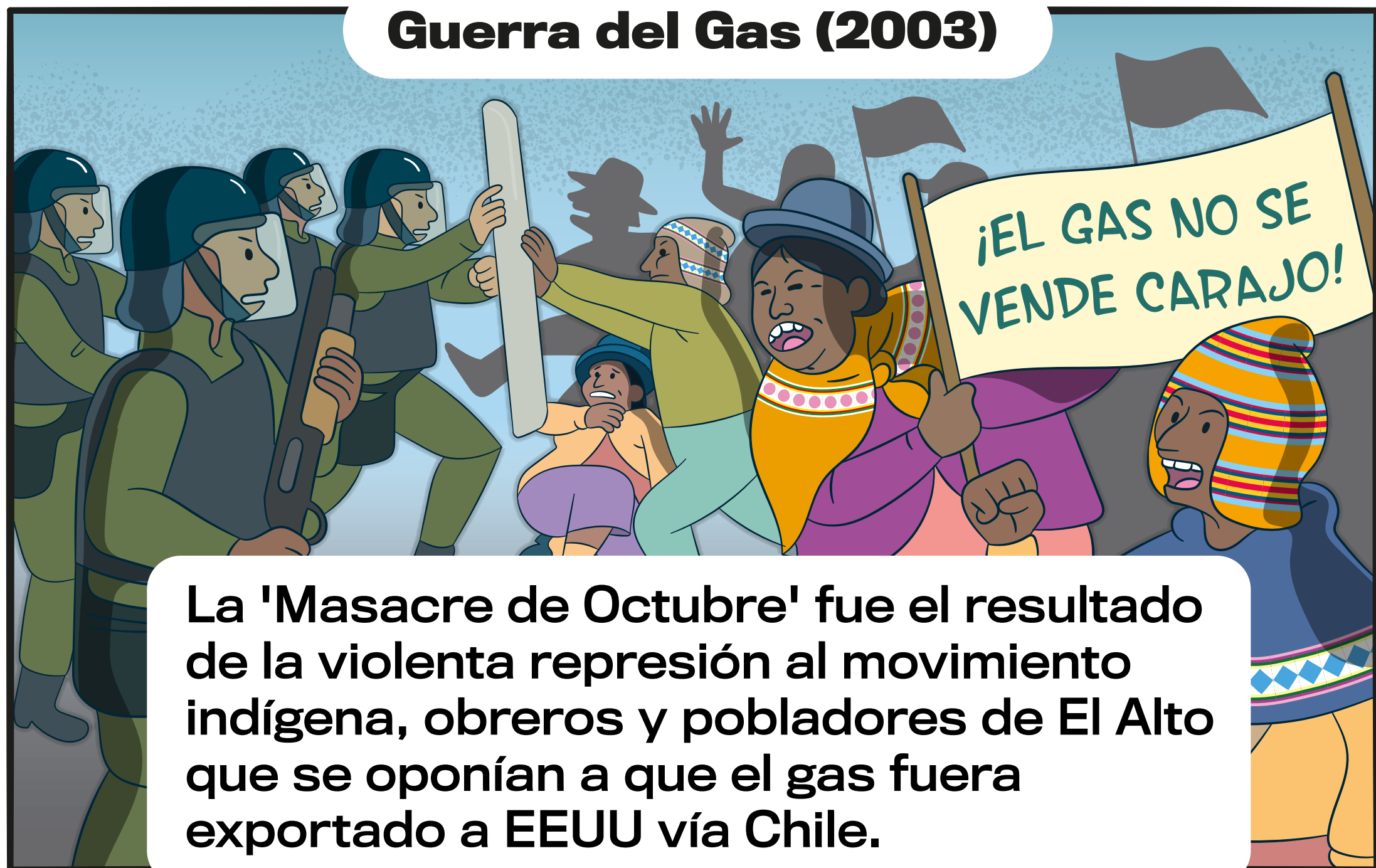
Criminalización, estigmatización y amenaza en Bolivia

El racismo es un elemento habilitador de violencia. Valida actos de tortura que dejan fuertes secuelas físicas, psicológicas y sociales en individuos y colectividades.

La ausencia de justicia y la impunidad contribuyen a reproducir estas conductas de odio, exclusión y xenofobia.

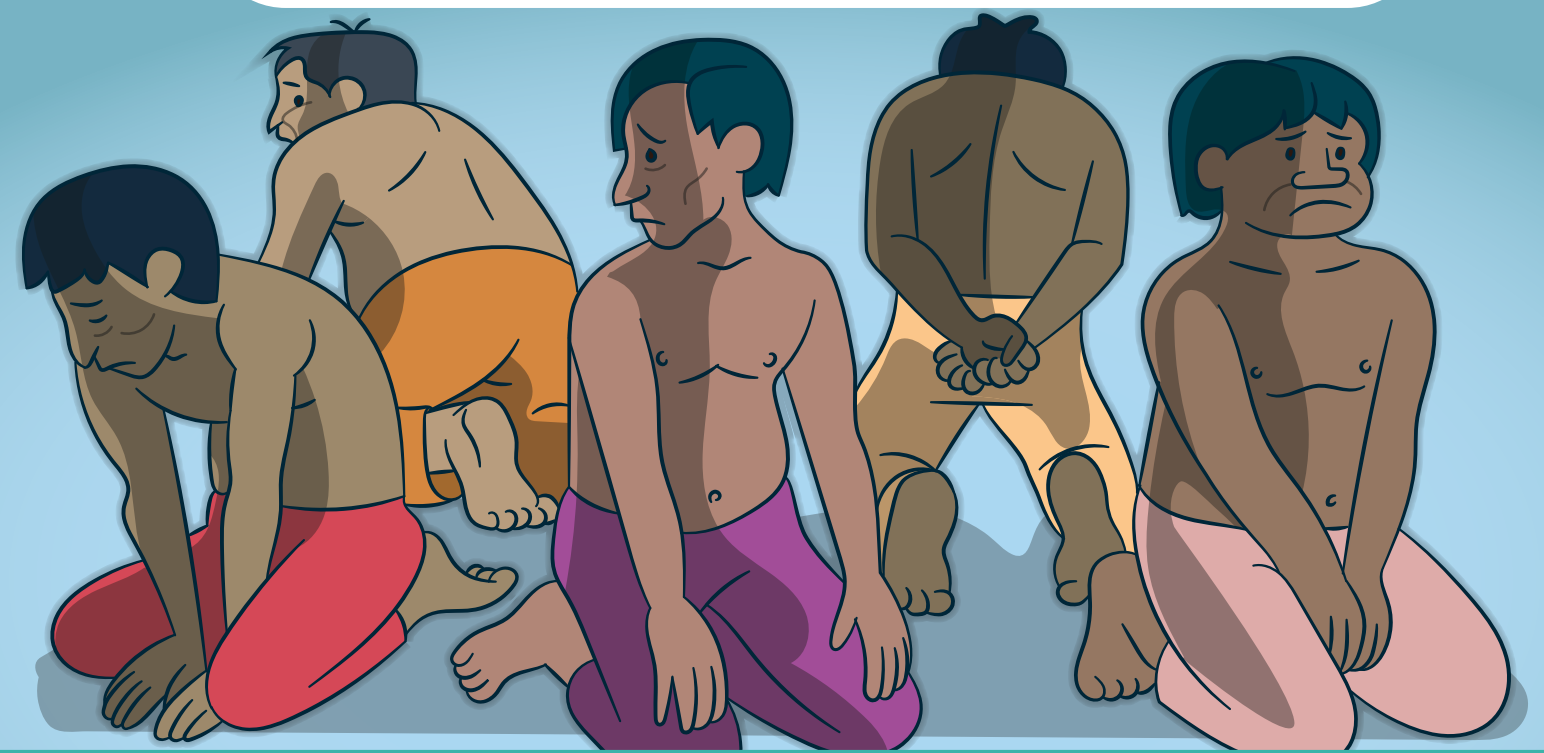
Hemos sido sujeto de torturas por pertenecer a comunidades indígenas. Las injustas criminalizaciones, estigmatizaciones y amenazas, han marcado nuestra historia reciente:

Guerra del Gas (2003)



La 'Masacre de Octubre' fue el resultado de la violenta represión al movimiento indígena, obreros y pobladores de El Alto que se oponían a que el gas fuera exportado a EEUU vía Chile.

Caso 24 de Mayo (2008)



25 indígenas fueron torturados y humillados en un acto de violencia racista por parte de universitarios, autoridades, y miembros del Comité Interinstitucional en Chuquisaca.

Defensa del TIPNIS (2011)



La octava marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore fue violentamente reprimida por la policía. Cerca de 200 personas fueron detenidas y más de 100 resultaron heridas.

Caso 19 de Noviembre (2019)



Tortura, represión masiva con adjetivos racistas contra la población de origen Aymara y Quechua acusados de sedición y terrorismo justificaron las masacres de Senkata y Sacaba.

Los autores de tortura, en todos los casos, han sido funcionarios del Estado.



Una experiencia similar vivió Andrés cuando tenía 12 años. Durante la Guerra del Gas, él y su hermana fueron interceptados por militares.



Les apuntaron con sus armas y los acusaron de espionaje. Al explicar que iban a la tienda ambos fueron reprimidos.

Retenidos en medio de alambres de púas, su hermana logra escapar.



Andrés recibió un culatazo que le fracturó el brazo. Un militar lo pateó en el muslo provocándole la caída al suelo y otro lo golpeó en la espalda.



Un grupo de personas se acercó con palos, distrayendo la atención de los militares. Su hermana logró acercarse en ese momento a Andrés y llevárselo.



A pesar de las múltiples fracturas que sufrió Andrés, el Hospital se negó a brindarle asistencia médica.



Luego de dos intentos para ser admitido, Andrés logra ser atendido y llevado a cirugía.



Las secuelas del incidente han marcado a Andrés de por vida a pesar de su corta edad.



Luego de los hechos, Andrés sufrió depresión, ataques de pánico, estrés postraumático y continuos dolores físicos.

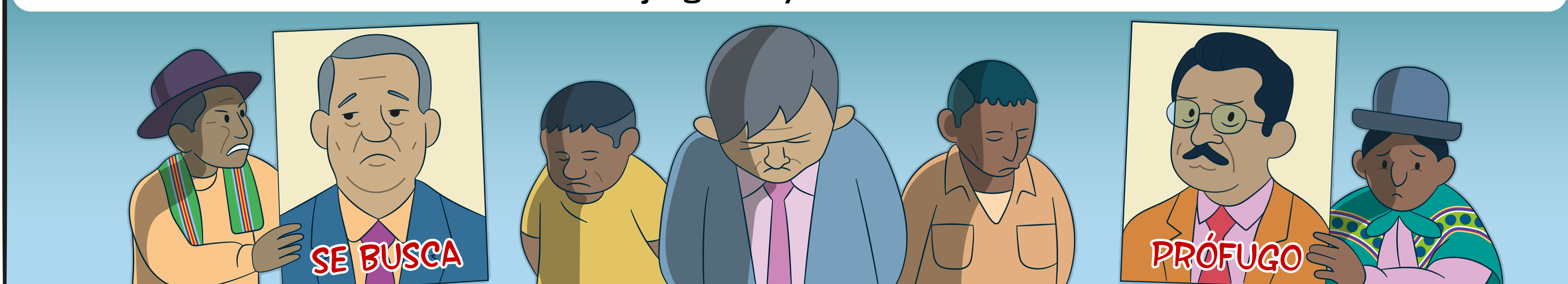
Su rendimiento escolar bajó y la pregunta era siempre la misma:



Un decreto emitido durante la Guerra del Gas habilitó a las Fuerzas Armadas para reprimir y violentar el pueblo en lucha. 63 personas fallecieron y decenas resultaron heridas. Casos de tortura física y desaparecidos fueron reportados.



El entonces presidente, y su ministro de gobierno, tienen un juicio pendiente en Bolivia por estos hechos. Sin embargo, lograron escapar y hoy viven en Estados Unidos. Los policías y militares involucrados han sido juzgados y sentenciados.



Aunque en algunas ocasiones se ha identificado a las autoridades que han ejercido represión y tortura, no hay procesos judiciales o sentencias contra todos los acusados.

Existe falta de diligencia estatal para intervenir oportunamente y agotar las acciones penales para evitar la impunidad y la revictimización.

La reparación de los derechos vulnerados se ha negado en varios casos y las víctimas han fallecido sin recibir justicia. Quienes sobreviven, no cuentan con un tratamiento diferenciado como personas indígenas.

